

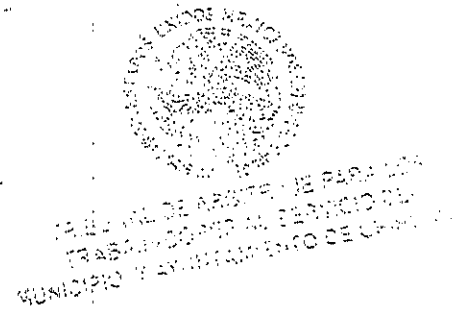
**TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA**

CÉSAR ALBERTO BOCANEGRA REYES

Vs.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Expediente TA/04/2015



EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., A LOS 26 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SE EMITE EL SIGUIENTE **LAUDO** POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA: -----

RESULTANDOS:

Primero.- Que por medio de escrito de fecha 13 de marzo de 2015, compareció ante este Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Municipio y Ayuntamiento de Chihuahua, **CÉSAR ALBERTO BOCANEGRA REYES** a demandar formalmente al Municipio de Chihuahua y/o Secretaría de Seguridad Pública Municipal y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo, por un **despido injustificado** que dice sucedió el día 13 de enero de 2015 que afirma fue objeto, reclamando el pago de las prestaciones consistentes en la Reinstalación en su empleo como policía de Academia, salarios caídos, prima legal de antigüedad, tiempo extraordinario, y para el caso de negativa a reinstalar se solicitó por el actor la indemnización constitucional, 20 días por año así como vacaciones y prima vacacional, sobre la base de los hechos que narra en su demanda los cuales obran a fojas 3 a 7 de los autos los cuales se tienen por reproducidos en este apartado en obvio de repeticiones, y ofreciendo sus pruebas en los términos de su escrito. -----

Segundo.- Radicada y emplazada la demanda, se tuvo a la parte demandada Municipio de Chihuahua, contestando la demanda en los términos de su escrito el cual obra en autos de foja 96 a 100 y que se tienen por reproducidas en este momento en obvio de repeticiones y ofreciendo pruebas en los términos de su escrito el cual obra a fojas 102 y 103 de los autos, del cual se desprende que esencialmente manifiesta la demandada que no le asiste derecho para reclamar la reinstalación en su empleo ni el pago de salarios caídos, en virtud de que niega que el actor hubiere sido despedido en forma alguna.

De las pruebas ofrecidas y objeciones formuladas a las mismas por ambas partes en su momento procesal oportuno se calificaron de legales y aceptadas, las pruebas que así lo ameritaron, las cuales en su momento oportuno se desahogaron. -----

TRASLADO

**TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA**

Tercero. - Rendidas que fueron las pruebas y calificadas de legales las que así lo ameritaron, y dado que los representantes de este Tribunal no solicitaron diligencia para mayor proveer el presente juicio, se declaró cerrada la instrucción de este y se turnaron los autos para emitir el proyecto de resolución, y en su oportunidad dictarse laudo definitivo.

Cuarto. - Emitido el laudo, la parte actora promovió juicio de amparo en contra del mismo, el cual le fue concedido por el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa, por lo que se ordenó a esta autoridad se dejara el laudo emitido y en su lugar se emitiera uno nuevo con los lineamientos contenidos en la sentencia deducida del juicio de [REDACTED] o que se realizó en fecha 18 de septiembre de 2019 en un primer momento y se dicta un segundo laudo en los términos siguientes:

CONSIDERANDOS

Primero. – Competencia.

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, en cumplimiento a lo dispuesto por el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito en el Estado, dentro del juicio de amparo directo administrativo [REDACTED] al tratarse (según se expone de dicho ejecutoria) de un conflicto derivado de un nexo administrativo entre el actor y el Municipio de Chihuahua;

Lo anterior se concluye por parte del Tribunal colegiado que se menciona derivado que, al ser el actor, miembro de la policía municipal, su relación con la demandada Municipio de Chihuahua, era de carácter administrativo, más no laboral, lo cual se encuentra establecido en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que señala la naturaleza administrativa del vínculo entre este grupo de servidores públicos con el poder público que los elementos de las instituciones policiacas *se rigen por sus propias leyes*, siendo esta última expresión la que los excluye de la aplicación de las normas de trabajo para los servidores públicos del Estado.

Así pues, señala dicho órgano colegiado que en términos del artículo 1° Constitucional, la falta de un órgano jurisdiccional no justifica el rechazo de la petición de justicia por parte del promovente, por lo que conforme a lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 17 de la misma Carta Magna, resulta "inconcuso que el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Municipio y Ayuntamiento de Chihuahua debe atender lo solicitado por el actor en el presente juicio y resolver la controversia planteada en cuanto al supuesto despido injustificado y las prestaciones de índole laboral reclamadas", señalando conforme a los criterios jurisprudenciales que invoca que esta autoridad jurisdiccional, dadas las facultades de que está investida en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, resulta ser la más afín para conocer de la demanda de que se trata dada la inexistencia de un Tribunal de lo contencioso administrativo en el Estado para conocer de asuntos de esta índole, facultades dotadas en los artículos 56 y 57 de la Ley de Responsabilidades de los

**TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA**

Servidores Públicos consistentes atender resoluciones administrativas, derivadas de conflictos sustentados por un servidor público con motivo de alguna sanción u omisión de pago de prestaciones surgidas de la relación existente con un órgano del poder público.

Segundo. – Fijación de la Litis.

I.- Que por medio del escrito de demanda de fecha 06 de marzo de 2015, consistente de 16 fojas y 10 anexos, recibido en este H. Tribunal de Arbitraje de Trabajadores al Servicio del Municipio y el Ayuntamiento de Chihuahua el día 13 de marzo de 2015, compareció el **C. CÉSAR ALBERTO BOCANEGRA REYES** por conducto de sus apoderados legales para demandar formalmente a **MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Y/O DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y/O A QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO**, reclamándole la siguientes **PRESTACIONES**: LA REINSTALACIÓN: Del actor con el reconocimiento de la antigüedad a partir del 04 de noviembre de 2006; 2.- EL PAGO DE LOS SALARIOS CAÍDOS: que se generen de la fecha del despido con sus respectivos incrementos, hasta la reinstalación; 3.- EL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD; y 4.- EL PAGO DEL TIEMPO EXTRAORDINARIO. Asimismo, y si no es el deseo de la demandada el Reinstalar al actor, se reclaman: a) LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL, b) EL PAGO DE VEINTE DÍAS POR AÑO DE SERVICIO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, y c) EL PAGO DE VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DEL ÚLTIMO AÑO DE LABORES.

Asimismo, fundó su acción y la demanda, manifestado que inició a prestar sus servicios, con fecha de 04 de noviembre de 2006, con el carácter de Policía de Academia, consistiendo sus funciones como policía preventivo y posteriormente, y hasta el despido del que se duele, como escolta; señala que se desempeñó en un horario de las 08:00 a las 20:00 horas de lunes a domingo con descanso rotativo, checando sus entradas y salidas en una bitácora de control de asistencia; que percibía un salario de \$695.00 de cuota diaria, \$168.00 por concepto de proporción diaria de compensación de escolta; asimismo, percibía diversas prestaciones en proporción diaria como lo son \$79.30 por concepto de bono de productividad, \$41.00 por concepto de Bono de grupo especial. Señala por último que, el 13 de enero de 2015, a las 12:10 horas, dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal, su Jefe Policía ALVARO PORRAS MONTES le manifestó que al parecer había salido mal en los exámenes de confianza y que fuera a la oficina del encargado de la guardia del Presidente Municipal, a lo que accedió el actor según expone y se entrevistó con el [REDACTED] quien le ratificó lo dicho por la diversa persona y le informó que lo ponían a disposición de la Subdirección Operativa de la Comandancia Zona Norte, por lo que encontrándose dichas personas en ese lugar, se entrevistaron con otras más sino que hasta las 14:45 horas fueron atendidos por el Jefe de Recursos Humanos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal quien le ratificó las razones por lo que lo pusieron a disposición y le señaló que por tal motivo lo tenía que dar de baja, lo que indicó sucedió ante la presencia de varios de sus compañeros.

II.- Por su parte, la demandada indicó que carecía de acción y derecho el actor a fin de demandar a Municipio de Chihuahua ni el pago de la Indemnización Constitucional, ni los Salarios Caídos y el pago de la prima de antigüedad ya que "de conformidad con el articulado de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la permanencia es el resultado del cumplimiento constante

**TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA**

de los requisitos establecidos en la presente Ley para continuar en el servicio activo de las Instituciones Policiales", invocando los artículos 88, inciso B, fracción VI; y 74. Por otro lado, en relación al tiempo extraordinario indicó que no se acepta tal derecho por pago de cantidad alguna a su favor.

Ahora bien, respecto a los hechos los controvierte de la siguiente manera: Reconoce la antigüedad del trabajador y acepta los contenidos en el primer párrafo del numeral 1; asimismo, indica reconocer la jornada en los términos que indicó el actor, así como el control de asistencia que para tal efecto se conserva. Por último, acepta lo relatado por el actor en el numeral 2, respecto de los hechos que se suscitaron el día 13 de enero de 2005, no los controvierte, y señala que es cierta la integración laboral (sic) que manifiesta. Agrega que no le asiste derecho al actor a la reinstalación ya que no reunió los requisitos de permanencia en las Instituciones Policiales, señalados en los artículos 74 y 88 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Expone que *la verdad de los hechos* es que el demandante en ningún momento fue objeto de un despido injustificado, sino que "de conformidad con el articulado de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en la presente Ley para continuar en el servicio activo de las Instituciones Policiales", invocando los artículos 88, inciso B, fracción VI; y 74.

Tercero. - Valoración de pruebas.

Dado lo anterior se procede a la valoración de las pruebas de aquellas que no ameritaron desahogo en los siguientes términos: _____

PRUEBA DE LA PARTE ACTORA

1.- LA CONFESIONAL, a cargo de **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA**, por conducto de quien legalmente la represente, medio de prueba que dada su naturaleza ameritó desahogo en términos y de ley, el cual se llevó a cabo el día 25 de septiembre de 2017 y del que se aprecia que el absolvente *se condujo de manera negativa* a todas y cada una de las posiciones que le fueron formuladas por el oferente, a lo cual este Tribunal considera negarle todo valor probatorio en virtud de que no se admite hecho alguno ni se acreditan hechos controvertidos, por lo que en nada le beneficia al oferente ni perjudica al absolvente. _____

2.- LA CONFESIONAL PARA HECHOS PROPIOS, a cargo de los C.C. _____ medio de prueba que dada su naturaleza ameritó desahogo en términos y de ley, señalando que respecto a los dos últimos en nada beneficia a su oferente dado el *desistimiento* que de dichos medios de prueba se expuso por aquél mediante manifestaciones vertidas en audiencia de fecha 25 de septiembre de 2017; ahora bien, por lo que se refiere al _____ se advierte su desahogo a fojas 214 de los autos, en donde

**TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA**

se da cuenta de la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas en fecha 14 de agosto de 2017, en el cual se tuvieron por admitidos y en consecuencia, por ciertos dada la confesión expresa de los siguientes hechos: 1.- **QUE EN FECHA 13 DE ENERO DE 2015, EL C. [REDACTED] ESTUVO PRESENTE AL MOMENTO DEL DESPIDO DE SU EMPLEO COMO POLICIA MUNICIPAL DEL SEÑOR CÉSAR ALBERTO BOCANEGRA REYES, AGREGANDO EL ABSOLVENTE QUE DE LA FECHA NO RECORDABA, PERO QUE SI ESTUVO PRESENTE ESE DÍA QUE LE NOTIFICARON A ÉL.** Extremos que serán adminiculados dentro de la Instrumental de Actuaciones. -----

TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA

3.- **LA TESTIMONIAL a cargo de [REDACTED],** la que en nada beneficia a los intereses de la parte oferente dado el desistimiento del desahogo realizado por el apoderado de la parte actora según se hizo constar en audiencia de fecha 25 de septiembre de 2017. -----

4.- **LA PRESUNCIONAL,** en su doble aspecto legal y humano, y la **INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES,** en todo lo que beneficie los intereses, serán analizadas juntamente con las ofrecidas por parte de la demandada. -----

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA

1.- **LA CONFESIONAL, a cargo del actor CÉSAR ALBERTO BOCANEGRA REYES,** la que en nada beneficia a los intereses de la parte oferente dado el desistimiento del desahogo realizado por el apoderado de la parte demandada según se hizo constar en audiencia de fecha 25 de septiembre de 2017. -----

2.- **LA TESTIMONIAL, a cargo de los C.C. [REDACTED]** medio de prueba que en nada beneficia a los intereses de la parte oferente ya que por lo que hace a los dos primeros su oferente se desistió de su desahogo según consta a fojas 215 de los autos y en relación al resto, se aprecia a fojas 273 que el apoderado de la parte demandada tuvo a bien desistirse de la testimonial a su cargo. -----

3.- **LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES,** así como la **PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA** y de las que de su análisis se tiene que la litis en el presente asunto se integra de la siguiente manera: el actor **CÉSAR ALBERTO BOCANEGRA REYES** demandó de la **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA Y/O AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA,** la reinstalación del actor en su puesto de **POLICÍA DE ACADEMIA** y las prestaciones derivadas de dicha acción ejercitara en los términos de ley, así como diversas accesorias (cuyo estudio se analizará posteriormente); asimismo, fundó su acción y la demanda, manifestado que el 13 de enero de 2015, a las 12:10 horas, dentro de las

**TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA**

Instalaciones de la Presidencia Municipal, su Jefe Policía [REDACTED] le manifestó que al parecer había salido mal en los exámenes de confianza y que fuera a la oficina del encargado de la guardia del Presidente Municipal, a lo que accedió el actor según expone y se entrevistó con el [REDACTED] quien le ratificó lo dicho por la diversa persona y le informó que lo ponían a disposición de la Subdirección Operativa de la Comandancia Zona Norte, por lo que encontrándose dichas personas en ese lugar, se entrevistaron con otras más sino que hasta las 14:45 horas fueron atendidos por el Jefe de Recursos Humanos de la **Dirección de Seguridad Pública Municipal** quien le ratificó las razones por lo que lo pusieron a disposición y le señaló que por tal motivo lo tenía que dar de baja, lo que indicó sucedió ante la presencia de varios de sus compañeros. **Por su parte, la demandada indicó que carecía de acción y derecho el actor a fin de demandar a Municipio de Chihuahua ni el pago de la Indemnización Constitucional, ni los Salarios Caídos y el pago de la prima de antigüedad** ya que "de conformidad con el articulado de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en la presente Ley para continuar en el servicio activo de las Instituciones Policiales", invocando los artículos 88, inciso B, fracción VI; y 74; que si bien se acepta lo relatado por el actor en el numeral 2, respecto de los hechos que se suscitaron el día 13 de enero de 2005, agrega que no le asiste derecho al actor a la reinstalación ya que no reunió los requisitos de permanencia en las Instituciones Policiales, señalados en los artículos 74 y 88 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en ningún momento fue objeto de un despido injustificado, sino que "de conformidad con el articulado de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en la presente Ley para continuar en el servicio activo de las Instituciones Policiales", invocando los artículos 88, inciso B, fracción VI; y 74.

Por lo que delimitada la litis, este Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Municipio y Ayuntamiento de Chihuahua, procede a resolver en los siguientes términos **EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO DENTRO DE LA EJECUTORIA DEDUCIDA DEL [REDACTED]** Que con los medios de pruebas aportados en autos, así como con las consideraciones de hecho y de derecho hechas valer por cada una de las partes, se considera a criterio de esta Autoridad Laboral que no le asiste acción ni derecho al actor de reclamar las prestaciones indemnizatorias consistentes en la Reinstalación en el empleo que desempeñaba así como al pago de la prima legal de antigüedad y el pago de salarios caídos, ya que con independencia de las diversas excepciones propuestas por la parte demandada en cuanto a los supuestos hechos acontecidos, tenemos que es menester de esta autoridad realizar un análisis detallado sobre el derecho a ejercer la acción intentada, es decir la **procedencia de la acción**. Lo anterior en virtud de que los elementos de la acción son una cuestión de orden público y los juzgadores deben analizar si el actor satisface los requisitos de la acción, ya que el juzgador debe verificar la existencia de la norma o normas complementarias que prevean tales beneficios, por lo que a verdad sabida y buena fe guardada se debe expresar las consideraciones en que funde su decisión.

Esto es, examinar si el trabajador que se dice despedido tenía derecho a solicitar la reinstalación en empleo, considerando el puesto y funciones que desempeñaba, como lo es el caso que nos ocupa,

**TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA**

así como la Dependencia para la que trabajaba. Debe estimarse al respecto que el artículo 123, apartado B, fracción XI, de nuestra Constitución Federal, establece que "Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley." No obstante, la diversa fracción XIII del mismo dispositivo constitucional señala que "Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes: "Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.", disposiciones de las que se desprende la naturaleza administrativa del vínculo entre el accionante y la demandada.

Por tanto, como se apuntó en el cuerpo de la ejecutoria que se da vista, los conceptos por los que subsistió la **absolución a la demandada MUNICIPIO DE CHIHUAHUA** consistentes en **salarios caídos, prima de antigüedad, y Reinstalación en su empleo así como el tiempo extraordinario reclamado**, son conceptos jurídicos inmersos en el campo del derecho del Trabajo y su fundamento se encuentra previsto en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, advirtiéndose que al ser el actor miembro de la policía municipal al servicio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Municipio de Chihuahua se encontraba sujeto a un régimen especial, por lo que sólo goza de los beneficios que las leyes respectivas les confieren, mismas que no contemplan el derecho a la reinstalación en su empleo y que por el contrario el artículo 123, Apartado B, de la Constitución General establece la prohibición de reinstalar a los policías como el actor, aún en el caso de concluir en la injustificación de su cese.

Razonamiento anterior que encuentra su fundamento jurisprudencial en la Tesis: 1a./J. 106/2010, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativa a la Novena Época con número de registro 163054, criterio emitido por la Primera Sala de nuestro máximo Tribunal y cuyo rubro y texto a continuación se exponen:

POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. SUS AGENTES PERTENECEN CONSTITUCIONALMENTE A UN RÉGIMEN ESPECIAL DONDE NO PUEDE RECLAMARSE LA POSIBLE AFECTACIÓN A DERECHOS LABORALES COMO EL DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO O CARGO O INMUTABILIDAD DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA.

Los agentes de la policía federal ministerial son empleados públicos nombrados mediante actos condición, que por virtud del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fueron excluidos de los derechos laborales de los trabajadores del Estado,

TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA

pero particularmente carecen del derecho a la estabilidad en el empleo y de la inmutabilidad de toda condición de ingreso o permanencia en el cargo, medida constitucional que se adoptó en congruencia con los principios del derecho internacional en la materia, particularmente en los artículos 9, punto 1, del Convenio 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, aprobado el 17 de junio de 1948; y 1, puntos 2 y 3, del Convenio 151 sobre la Protección del Derecho de Sindicación y los Procedimientos para Determinar las Condiciones de Empleo en la Administración Pública aprobado el 27 de junio de 1978, ambos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los que se recomendó la no inclusión como trabajadores estatales de militares, marinos, cuerpos de seguridad pública en los derechos laborales, como también se les excluyó de los derechos de estabilidad por las características peculiares de sus servicios públicos cuyo objeto es el establecimiento del orden, la estabilidad y defensa de la nación, o para su imagen interna, cuyo control requiere de una rígida disciplina jerárquica de carácter administrativo, una constante vigilancia y una movilidad de los cargos y servidores públicos en razón de las necesidades que se suscitan para el Estado y que representa una medida de orden constitucional a la fecha y que reconoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia del Tribunal en Pleno P./J. 24/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 43, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.". De todo lo anterior se sigue que la relación jurídica entre el Estado y un agente del servicio público de seguridad no es de trabajo, ni siquiera la que corresponde a un empleado de confianza como lo establece la jurisprudencia de la Segunda Sala del alto tribunal 2a./J. 14/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, marzo de 1998, página 352, de rubro: "POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LOS QUE SE LES CONSIDERA TRABAJADORES DE CONFIANZA, SON INCONSTITUCIONALES DE ACUERDO CON LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA RELATIVA.", por lo cual no pueden reclamar la posible afectación a derechos de estabilidad laboral ni la inmutabilidad de las condiciones de subsistencia de su nombramiento.

Amparo en revisión 2198/2009. Néstor Faustino Luna Juárez. 3 de febrero de 2010. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero.

Amparo en revisión 21/2010. Luis Federico Tapia Cedillo. 17 de febrero de 2010. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.

Amparo en revisión 40/2010. José Antonio Gutiérrez Lara. 3 de marzo de 2010. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Eugenia Tania C. Herrera-Moro Ramírez.

Amparo en revisión 90/2010. Salvador Rubén Vázquez Ortiz. 24 de marzo de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente y Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez.

Amparo en revisión 410/2010. José Carlos Loria Yunes. 7 de junio de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente y Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas; en su ausencia hizo suyo el asunto Juan N. Silva Meza. Secretaría: Rocío Balderas Fernández.

Tesis de jurisprudencia 106/2010. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de diecisiete de noviembre de dos mil diez.

Por lo que, en virtud de lo anterior, resulta lo conducente confirmar la **ABSOLUCIÓN** a la demandada Municipio de Chihuahua de **REINSTALAR** al actor **CÉSAR ALBERTO BOCANEGRA REYES** en las labores que desempeñaba al servicio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal como

**TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA**

policia de academia, dada la improcedencia de la Reincorporación solicitada, así como al pago de prima legal de antigüedad y salarios caídos reclamados por los razonamientos que fueron vertidos en párrafos anteriores.

No obstante lo anterior, le corresponde a este Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Municipio y Ayuntamiento de Chihuahua dilucidar el fondo de la litis planteada y en su caso, de asistir el derecho a la parte actora, resolver cuáles beneficios le corresponden al accionante, ello en cumplimiento a la sentencia ejecutoria de referencia.

Esto es que, de la litis que fue fijada por las partes y resaltada por este Tribunal, se tiene que la parte patronal, autoridad, fue omisa en señalar los motivos, causas o circunstancias particulares de la determinación a que llegó cuando se dio la terminación del vínculo con el actor; es decir, que de la redacción de la controversia de hechos expuesta por la parte demandada, se aprecia la admisión del cese del actor debido a que "había salido mal en los exámenes de confianza"; sin embargo, no se desprende que se hubiese seguido el procedimiento de separación por incumplimiento a los requisitos de ingreso y permanencia previsto para tal efecto en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, ni se observaron en consecuencia las formalidades esenciales del procedimiento, violentando con ello los derechos humanos del actor contenidos en la norma constitucional del artículo 14 coartándole su derecho de garantía de audiencia y debido proceso, garantías que comprenden el derecho a participar dentro del procedimiento aportando material probatorio de su interés así como la oportunidad de alegar en su defensa previamente a la decisión del cese; sin que se le hubiese si quiera hecho entrega por escrito de la determinación a que se llegó ni acompañando medio de prueba alguno con el cual se acreditara los supuestos exámenes de confianza cuyos requisitos no cumplimentó el actor según el dicho de la parte demandada Municipio de Chihuahua.

Es así que debido a la disposición constitucional contenida en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya citada, la relación entre el Estado y los trabajadores de institucionales policiacas es de naturaleza administrativa, regulada por las leyes y reglamentos que les correspondan; por lo cual, es la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua la que establece en sus artículos 202 a 216 el procedimiento que la demandada debió observar previo a determinar la destitución, cese o baja del actor, lo que de manifiesto se tiene que no aconteció, motivo por el cual y se insiste, el actor le asiste derecho en sus pretensiones dada la ilegalidad en su separación de sus funciones y en consecuencia el estado de indefensión en que se constituyó.

Ahora bien, es dicho ordenamiento jurídico, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua en su artículo 56 que dispone en su segundo párrafo la sanción para el caso que nos ocupa, a saber:

**TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA**

"Artículo 56.

...

En caso de que los órganos jurisdiccionales resuelvan que la separación o remoción del Integrante es injustificada, el Estado o el municipio respectivo sólo estará obligado a pagar una indemnización equivalente al importe de tres meses de su percepción diaria ordinaria, así como el equivalente a veinte días de dicha percepción por cada uno de los años de servicios prestados; el pago de la percepción diaria ordinaria únicamente por el tiempo que dure el trámite de los procedimientos, juicios o medios de defensa promovidos, sin que en ningún caso esta prestación exceda de la cantidad equivalente al pago de doce meses de dicha percepción, así como los proporcionales adquiridos.

Del anterior precepto, se desprende que la sanción comprende el pago de los siguientes conceptos:

1. *Indemnización equivalente al importe de tres meses de su percepción diaria ordinaria.*

Misma que consta del monto de **\$88,502.40 (OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOS PESOS 40/100 M.N.)**, cantidad que se obtiene de multiplicar la percepción ordinaria diaria de \$983.36 (que no fue controvertida por las partes, así como tampoco fue materia de la ejecutoria deducida del amparo del que se da cumplimiento) por noventa días que comprenden los tres meses que dispone el precepto de referencia.

2. *Equivalente a veinte días de dicha percepción por cada uno de los años de servicios prestados.*

Se tiene que el actor prestó sus servicios del día 04 de noviembre de 2006 al 13 de enero de 2015; por tanto, se traduce en ocho años con setenta días de servicio a favor de la autoridad patronal Municipio de Chihuahua. Es así como la condena por dicho concepto asciende a la cantidad de **\$161,074.36 (CIENTO SESENTA Y UN MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.)**, misma que se obtiene de multiplicar los 20 días de condena por cada uno de los ocho años de servicio (160 días de percepción ordinaria \$983.36) y sumar la parte proporcional a la última anualidad laborada que comprendió setenta días del noveno año de antigüedad (3.8 días de percepción ordinaria \$983.36).

3. *Percepción diaria ordinaria por el tiempo que dure el trámite de los procedimientos, juicios o medios de defensa promovidos, sin que en ningún caso esta prestación exceda de la cantidad equivalente al pago de doce meses de dicha percepción.*

Dicho concepto, como de la redacción del articulado se desprende, se encuentra limitado en su temporalidad de pago hasta doce meses de percepciones ordinarias diarias, en el caso de que el trámite de los procedimientos se exceda a dicho periodo de tiempo, lo que en el caso aconteció. Por lo anterior, la sanción de que se trata asciende a **\$354,106.80**

**TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA**

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS PESOS 80/100 M.N.), cantidad que resulta de multiplicar la citada percepción diaria de \$983.36 por treinta días por los doce meses a que se encuentra topado dicho concepto.

4. Los proporcionales adquiridos.

De los cuales, nos ocupamos en el párrafo siguiente.

Por lo que respecta a la prestación reclamadas consistente en el pago de **aguinaldo, vacaciones y prima vacacional correspondientes y proporcionales al último año laborado**, tenemos que la demandada en su contestación señala que no se le adeudan, ya que los mismos fueron cubiertos oportunamente. De lo anterior se concluye que, según lo señalado por los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria en atención a los artículos 77, 78 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua 77, 165, 169 y 176, del Código Administrativo del Estado, le corresponde la carga procesal de demostrar que dicho pago se realizó, siendo que del material probatorio no se soporta dicha fatiga procesal, por lo que no se acredita la excepción de pago planteada por la parte demandada. Por lo que se procede a **CONDENAR** a la parte demandada **Municipio de Chihuahua** al pago de estas prestaciones; y considerando que conforme a lo no controvertido por las partes, le correspondía al actor por concepto de AGUINALDO el importe de 40 días de salario proporcionales al último año laborado desempeñándose a favor de dicha moral, por lo que se condena a pagar a la demandada la cantidad de **\$39,334.40** pesos por concepto de aguinaldo; ahora bien, le corresponde al año 20 días de salario de vacaciones por todo el año laborado, por lo que se condena a la demandada a pagar **\$19,667.20** pesos por concepto de vacaciones, más **\$5,900.16** pesos por concepto de prima vacacional ya que le corresponde el 30% de prima vacacional, montos de prestaciones contenidas en el Contrato colectivo vigente celebrado entre el **Municipio de Chihuahua y sus trabajadores**.

Por lo que respecta al **salario diario** que ha servido de base para la cuantificación de las prestaciones a que se condenó a la demandada **Municipio de Chihuahua**, se tiene por cierta la cantidad de **\$983.36** como el **salario que, ordinariamente devengada el actor**, mismo que se compone de \$695.00 por concepto de salario cuota diaria, más las prestaciones de carácter consistentes en "bono de productividad" por la cantidad de \$79.30 en su proporción diaria, "bono de grupo especial" por \$41.00 diarios, "compensación escolta" por el monto diario de 168.00, ya que no existe controversia en relación al monto del salario cuota diaria que percibía el actor así como tampoco por el resto de las prestaciones ni en concepto ni en monto. Salario diario ordinario calculado de conformidad con el numeral 84 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, el cual debe integrarse con salario cuota diaria, más todas las prestaciones que perciba el trabajador diariamente, según se estableció por el siguiente criterio jurisprudencial, en la parte conducente de la Jurisprudencia Tesis: I.130.T. J/8. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plasmada a fojas 1318 Tomo XXIV Octubre del 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto rezan al siguiente tenor:

**TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA**

"VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO. SALARIO QUE DEBE SERVIR DE BASE PARA SU CUANTIFICACIÓN."

Las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo son prestaciones de carácter legal previstas en los artículos 76, 80 y 87 de la Ley Federal del Trabajo, ordenamiento que fija las condiciones mínimas para su otorgamiento y que establece su pago con base en el salario del trabajador, el cual, para efectos de su cuantificación, es el ordinario, que de conformidad con el numeral 82 de la citada legislación debe integrarse con la cuota diaria, más todas las prestaciones que perciba el trabajador diariamente, a pesar de que en una contratación colectiva o en las condiciones generales de trabajo se aluda a conceptos diversos de salarios para el pago de ese tipo de prestaciones, como son los denominados: tabulado, compactado, fijo, base, neto o cualquier otro, pues dada la naturaleza genérica del salario, debe considerarse para su pago el relativo al último precepto, es decir, la cantidad con que se retribuye al obrero por su trabajo de manera diaria, en el que se incluirá el denominado: tabulado, compactado, fijo, neto o base, y las prestaciones que ordinariamente perciba. DÉCIMOTERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Por último, en cuanto a la prestación reclamada y consistente en **tiempo extraordinario**, se tiene que la parte actora indicó que su jornada se llevaba a cabo de las ocho a las veinte horas de lunes a domingo de cada semana con un día rotativo de descanso de lunes a jueves; por su parte la demandada no controvertió el horario laborado por el actor y reconoció que el actor checara tanto la entrada como la hora de salida en la bitácora de control de asistencia. No obstante lo anterior, este **Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Municipio y del Ayuntamiento de Chihuahua** al analizar la procedencia de la reclamación, advierte que no le corresponde acción y derecho para reclamar dicha prestación ya que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los grupos constituidos por militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, a que se refiere la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, no pueden considerarse regulados por el régimen general de trabajadores al servicio del Estado, sino que su relación con el poder público es de naturaleza distinta, tal como se encuentra dispuesta su normatividad en la fracción XIII de la Constitución, al señalar que los citados grupos deben regirse por sus propias leyes, lo que responde a la necesidad de regular de manera exclusiva un sector de la sociedad que, por sus características merecen un trato diferente, ya que se trata de una institución creada para cumplimentar con fines propios de la seguridad pública, es decir, que tienen como finalidad salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, lo que los sitúa en un régimen objetivo y materialmente distinto al resto de los servidores públicos y de la población civil, por lo que hace el ámbito de sus relaciones y derechos laborales.

De manera que si bien el pago de tiempo extraordinario -entendido como la prestación que cubre una jornada de proporción mayor a la del horario ordinario, es decir, una extensión del tiempo máximo que el trabajador debe laborar-, está previsto como derecho para los trabajadores al servicio del Estado en la fracción I del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, en tanto dispone la duración máxima de la jornada de trabajo y que el tiempo que exceda será pagado

TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA

como tiempo extraordinario; lo cierto es que esta norma no rige para los servidores públicos que se enuncian en la fracción XIII del indicado apartado B.

Además, cabe destacar que la razón que subyace en el derecho a recibir el pago por tiempo extraordinario es la prolongación de la jornada por causas extraordinarias que hacen necesario atender la contingencia. Siendo que, tratándose de miembros de instituciones policiales, no puede entenderse esta necesidad, porque por las funciones que desempeñan y el cometido constitucional que cumplen, como lo es la seguridad pública del Municipio en este caso, en todo momento existe urgencia que atender.

Razonamientos que se encuentran contenidos en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal, relativa a la Décima Época y con el número de registro 2016430, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con los siguientes datos de identificación Libro 52, Marzo de 2018, Tomo II Tesis: 2a./J. 17/2018 (10a.) y cuyos rubros y textos rezan al tenor siguiente:

HORAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIAS. NO PROCEDE SU PAGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, NI SIQUIERA BAJO UNA INTERPRETACIÓN CONFORME, CUANDO LAS RESPECTIVAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS PROSCRIBAN ESA PRESTACIÓN.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que los grupos constituidos por militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales a que se refiere la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no pueden considerarse regulados por el régimen general de trabajadores al servicio del Estado, sino que su relación con el poder público es de naturaleza administrativa. Ahora, si bien el pago de tiempo extraordinario está previsto como derecho constitucional para el régimen general de los trabajadores al servicio del Estado, lo cierto es que no rige para los miembros de las instituciones policiales, por lo que las legislaciones secundarias que regulan sus relaciones laborales y que prohíben el pago de "tiempo extraordinario", no contravienen el texto constitucional ni pueden someterse a una interpretación conforme para acceder a dicha prestación, porque esas legislaciones no se conducen por los principios en materia de trabajo burocrático estatal, máxime si se atiende a que los cuerpos policiales desempeñan una importante función en la protección de la sociedad y la salvaguarda de los derechos de las personas, por lo que por las necesidades que requiere esa labor preponderante, tanto la manera en la que se determine la jornada laboral como las contraprestaciones que deben otorgarse por dicho servicio, han de atender a las características propias y exigencias inherentes a esa labor de seguridad pública, conforme lo establezcan sus propias leyes.

Contradicción de tesis 324/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Administrativa del Tercer Circuito y Segundo en Materia de Trabajo del Sexto Circuito. 31 de enero de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Disidente: Javier Laynez Potisek. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretaria: Diana Cristina Rangel León.

**TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA**

Consideraciones todas éstas que permiten a este Tribunal concluir en que lo procedente resulta en **ABSOLVER** a la moral Municipio de Chihuahua del pago de tiempo extraordinario por los razonamientos anteriormente vertidos. _____

Analizadas que fueron las pruebas en conciencia a verdad sabida y buena fe guardada en relación a los hechos controvertidos y con fundamento en los dispuesto por los artículos 840, 841, 842, 843, 844, 845, 885, 886 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, es de resolverse y: _____

SE RESUELVE:

PRIMERO. - El actor **CÉSAR ALBERTO BOCANEGRA REYES** acreditó parcialmente sus acciones y la demandada Municipio de Chihuahua, acreditó parcialmente sus excepciones, en consecuencia: ----

SEGUNDO. - Se **CONDENA** a la demandada Municipio de Chihuahua al pago de las siguientes prestaciones: _____

- A) La cantidad de **\$39,334.40** (TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.) por concepto de aguinaldo generado durante el tiempo que laboró el actor para la demandada en el último año de labores. _____
- B) Las cantidades de **\$19,667.20** (DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.) y **\$5,900.16** (CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS 16/100 M.N.) por concepto de vacaciones y prima vacacional correspondientes al último año de servicios de actor. _____
- C) Indemnización equivalente al importe de tres meses de su percepción diaria ordinaria, por **\$88,502.40** (OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOS PESOS 40/100 M.N.). _____
- D) La cantidad de **\$161,074.36** (CIENTO SESENTA Y UN MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.), equivalente a veinte días de dicha percepción por cada uno de los años de servicios prestados. _____
- E) La cantidad de **\$354,106.80** (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS PESOS 80/100 M.N.), por concepto de percepciones diarias ordinarias de doce meses. _____

TERCERO. - **SE ABSUELVE** a la demandada Municipio de Chihuahua al pago del resto de las prestaciones reclamadas por el actor en su demanda. _____

**TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA**

ASÍ LO RESOLVIERON LOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS CADA UNO DE LOS REPRESENTANTES Y ANTE EL SECRETARIO, QUIEN ACTÚA Y DA FE. _____

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES: A LA ACTORA EN [REDACTED] Y A LA DEMANDADA [REDACTED] AMBOS DE ESTA CIUDAD, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISUUESTO POR LOS ARTÍCULOS 739, 740, 744 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE APLICACIÓN SUPLETORIA. --

Presidente del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al

Servicio del Municipio de Chihuahua

Lic. Héctor Manuel Granados Arana

Representante de los Trabajadores

C. Ramón Alonso Hernández Ramírez

Representante del Municipio

Lic. Rafael Alejandro Corral Valverde

Secretario de Acuerdos

Lic. Mayra Georgina Amézquita Chávez